

Rancagua, catorce de agosto de dos mil veintitrés.

VISTO Y CONSIDERANDO:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma:

1° Que el recurrente se alzó en contra de la sentencia dictada en la presente causa el dos de noviembre de dos mil veintidós, por el Segundo Juzgado Civil de Rancagua, en los autos Rol C-6416-2020, deduciendo nulidad formal y recurso de apelación, este último en subsidio del anterior.

Funda su impugnación en la causal del artículo 768 N°5 en relación al 170, ambos del Código de Procedimiento Civil, la que se habría configurado cuando el tribunal tuvo por acompañados los documentos aparejados por la demandante a folio 55, en contravención a lo dispuesto por ley, y luego porque la sentencia definitiva fue dictada habiéndose omitido pronunciamiento sobre la objeción de fondo deducida por su parte a folio 62 respecto de la misma documental.

Endilga también una segunda causal de casación que funda en el artículo 768 N°9, esta vez en relación al 795 N°s 4 y 5, todos del Código de Procedimiento Civil, esto es que la sentencia fue dictada faltándose a algún trámite o diligencia declarados esenciales por la ley, o cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad, concretamente y para el caso, la práctica de diligencias probatorias cuya omisión podría producir la indefensión y la agregación de los instrumentos presentados oportunamente por las partes, con citación o bajo el apercibimiento legal que corresponda respecto de aquella contra la cual se presentan.

Desarrollando ambas causales indicó que la errada incorporación de los documentos agregados por la contraria impide que aquellos sean valorados en su mérito, al no ser introducidos al proceso en forma legal,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KHWQXHPZGMB

siendo posteriormente valorados por el tribunal, afirmando erróneamente no haber sido objetada por la recurrente, lo que determinó que el sentenciador de primer grado tuviera por acreditados varios hechos controvertidos en el pleito.

Señala que los vicios alegados han tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, toda vez que los documentos erróneamente aparejados al proceso y luego objetados en el fondo sirvieron -en definitiva- al sentenciador para dar lugar a la acción intentada por la demandante, dejándose entonces de ponderar la prueba conforme a derecho, por lo que solicita, en síntesis, se anule la sentencia recurrida y se dicte en su reemplazo aquella que en derecho corresponda.

2° Que, como sostiene la doctrina, el recurso de casación en la forma "...es el acto jurídico procesal de la parte agraviada, destinado a obtener del tribunal superior jerárquico la invalidación de una sentencia, por haber sido pronunciada por el tribunal inferior con prescindencia de los requisitos legales o emanar de un procedimiento viciado, al haberse omitido las formalidades esenciales que la ley establece". (Maturana

M. Cristian, **Los Recursos**; Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 1997, p.229)

3° Que, conforme lo expuesto, este recurso fue establecido por la ley con el objeto de velar por el exacto cumplimiento de las disposiciones legales que se refieren a la forma externa de los litigios y a su cumplido desarrollo procesal. De este modo, su planteamiento debe cimentarse en las excepcionales situaciones de transgresión a la ritualidad que permiten la nulidad del fallo dictado en esas circunstancias. (Corte de Santiago Rol 6652-2014).



4° Que, fundando la primera causal de casación interpuesta, el recurrente hace un acabado análisis acerca de la forma en que fue aparejada la documental ofrecida por la contraria, para decir que su errónea incorporación le impide ser valorada, lo que no se condice directamente con el fundamento de la causal, esto es, la omisión de algún requisito de la sentencia definitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 170, toda vez que, la misma alegación fue oportuna y correctamente resuelta por el tribunal de la instancia.

Sin embargo, de la revisión de la carpeta digital, se advierte que en la misma oportunidad la recurrente objetó el valor probatorio de la citada documental, trabándose un incidente del que se dio oportuno traslado a la contraria, y que nunca fue resuelto por el tribunal una vez evacuado éste último.

5° Que respecto de la primera alegación, que es también fundamento de la segunda causal de casación, tal y como acertadamente razona el juez del grado, la norma del artículo 795 N°5 del Código de Procedimiento Civil, dispone expresamente que es un trámite esencial en los procedimientos de mayor y menor cuantía, además de especiales, la agregación de los instrumentos presentados oportunamente por las partes, con citación o bajo el apercibimiento legal que corresponda respecto de aquella contra la cual se presentan.

Corresponde entonces al tribunal tener por acompañados los documentos agregados bajo el apercibimiento legal que corresponda o con citación, tal y como tuvo lugar en el caso de autos, de lo que se concluye que el tribunal no ha incurrido en falta alguna que deba ser corregida por esta vía.

6° Que conforme lo razonado en el motivo que antecede, se desestimarán las alegaciones vertidas por la parte recurrente en este sentido, tanto en la primera



como en la segunda causal de casación interpuestas, subsistiendo únicamente aquella alegación relativa a la omisión en el pronunciamiento respecto de la objeción al fondo de la documental rendida a folio 55.

7° Que, por resolución fundada el tribunal de primera instancia confirió a folio 65 de su tramitación, el traslado de las alegaciones relativas al valor probatorio de los documentos presentados a folio 55, el que fuera evacuado por la parte que los presentó a folio 69 y respecto de lo cual el tribunal nunca emitió pronunciamiento, dictándose la sentencia definitiva con omisión de la decisión respecto de aquellas objeciones, y todavía más, asignándoles valor en lo dispositivo del fallo, conforme se indicó en los fundamentos noveno, décimo y décimo primero de la sentencia que se recurre.

8° Que la actuación del tribunal da cuenta de haberse dictado sentencia definitiva, con omisión del asunto controvertido, el cual comprende todas las acciones o excepciones que se hicieron valer en el pleito, desatendiendo con ello una tutela judicial efectiva, entendida ésta última como el derecho que tiene cada persona de ejercitar la defensa de sus intereses legítimos y como la obligación de los órganos judiciales de velar por su cumplimiento a fin de evitar la indefensión de aquella ante la vulneración de sus derechos. La tutela judicial, sólo se entiende satisfecha una vez que el juez o tribunal ha resuelto íntegramente sobre el caso, siguiendo un proceso racional y justo que cumple con todas las garantías procesales dispuestas legalmente.

A la luz de lo razonado, resulta evidente que al omitir pronunciamiento el tribunal respecto de las objeciones, debida y oportunamente alegadas por la demandada, se ha vulnerado la mentada tutela, pues se



ha accedido a la pretensión de la actora, precisamente en base al valor que otorgó a esos mismos documentos.

9° Que en la especie, y versando los antecedentes sobre una acción de nulidad, debió resolverse la objeción planteada, previo a pronunciarse sobre el fondo, cuestión que no se hizo, omitiéndose así la decisión de una de las cuestiones debatidas en el pleito, cuya falta resultó, ciertamente, en la indefensión de la parte que de forma oportuna objetó el valor probatorio de la documental que serviría de base al pronunciamiento de la sentencia definitiva, lo que justifica acoger el recurso de casación en la forma y por la causal que se examina.

II.- En cuanto a la apelación:

10° Que atendido lo resuelto en el motivo que antecede y habiéndose interpuesto el recurso de apelación subsidiario de la casación, se omitirá su pronunciamiento.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad además con lo que disponen los artículos 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se decide:

I.- Que se **ACOGE**, por la causal del artículo 768 N° 5, del Código de Procedimiento Civil en relación al 170 N° 6 del mismo cuerpo de normas, el recurso de casación en la forma deducido por la demandada, en contra de la sentencia definitiva de dos de noviembre de dos mil veintidós, pronunciada a folio 111 de la carpeta digital, dictada por el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Rancagua, la que **se anula** en todo lo pertinente, y se la reemplaza por la que, sin nueva vista, pero separadamente, se dicta a continuación.

II.- Que cuanto a la apelación, también deducida por la recurrente, atendido a lo dispuesto en el resolutivo I, se omite pronunciamiento.

Regístrese y devuélvase.







Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KHWQXHPZGMB

Rol I. Corte 1559-2022.

“Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema”.

Se deja constancia además que no firma la Ministra Suplente señora Visnia Madmoud Auad por haber cesado sus funciones en esta Corte, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo del mismo.

<div></div> <div>Bárbara Verónica Quintana Letelier Ministro(P) Corte de Apelaciones Catorce de agosto de dos mil veintitrés 19:14 UTC-4</div> <div></div>	<div></div> <div>Alberto Salvador Veloso Abril Abogado Corte de Apelaciones Catorce de agosto de dos mil veintitrés 18:25 UTC-4</div> <div></div>
--	---



Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministra Presidente Barbara Quintana L. y Abogado Integrante Alberto Salvador Veloso A. Rancagua, catorce de agosto de dos mil veintitres.

En Rancagua, a catorce de agosto de dos mil veintitres, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KHWQXHPZGMB

Rancagua, catorce de agosto de dos mil veintitrés.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia que precede y a lo dispuesto en el artículo 798 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:

VISTOS:

Se reproduce la sentencia que se invalida, eliminándose en su motivo décimo la frase “no objetada por la contraria”, y se tiene además presente.

I.- EN CUANTO A LA OBJECCIÓN DOCUMENTAL:

PRIMERO: Que en el segundo otrosí de la presentación de la parte demandada, rolante a folio 62, ésta última objetó los documentos aparejados a folio 55, consistentes en:

- i) Certificado médico emitido por el facultativo Rafael Aranguiz Loyola; impugnado por falta de autenticidad, ya que se trata de un instrumento privado emanado de un tercero, del cual no consta que la rúbrica puesta en el documento corresponda a quien indica extenderlo ni su data, como tampoco que quien suscribe tenga las competencias y especializaciones para emitir las afirmaciones contenidas en el mismo.
- ii) Copia Autorizada ante Notario Público Pedro Reveco Hormazabal, del certificado médico emitido con fecha 26 de septiembre de 2013, por la facultativo María Esther Meroni; impugnado por falta de autenticidad, cuestionado bajo los mismos argumentos que el documento que antecede (i), y añadiendo que en este caso además se individualiza como paciente a Slim Lasertte González, sin indicación de su cédula de identidad, por lo que tampoco consta con certeza la persona de que se trata.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TSWBXHQZGMB

- iii) Set de correos electrónicos enviados por Marta Farías Allende a Elizabeth Lafertte G. de fecha 24 de septiembre de 2013 y respuesta de fecha 25 de septiembre del mismo año; impugnado por falta de autenticidad y de integridad, por cuanto se trata de instrumentos privados emanados supuestamente de las partes y que no fueron acompañados con conocimiento o bajo el apercibimiento señalado en el artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, por lo tanto no pueden ser valorados en juicio.
- iv) Impresión de página web de farmacias Cruz Verde, de fecha 10 de febrero de 2022, en la cual se consultó por el medicamento Mimetix; impugnado por falta de autenticidad y por falta de integridad, toda vez que se trata de un documento electrónico privado y debe ser acompañado con conocimiento y bajo el apercibimiento señalado en el artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no pueden ser valorados en juicio.
- v) Impresión de consulta página web vademécum.es, por medicamento Dantex; impugnado en razón de los mismos argumentos relativos al documento que antecede, esto es, ser un documento electrónico privado que debió ser acompañado con conocimiento y bajo el apercibimiento señalado en el artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, lo que al no ocurrir en la especie, impide su valoración en juicio.
- vi) Ficha clínica de Slim Herbert Lafertte González, emitida por el Centro de Salud Familiar Cefam, de la comuna de Doñihue; impugnado por falta de autenticidad, al no haberse acompañado con citación, por lo que no podría ser valorado en juicio, a lo que el recurrente adiciona el que no



consta su autenticidad al no haberse acreditado que haya sido otorgados por quien lo suscribe y en la fecha que se indica.

- vii) Informe médico emitido por el neurólogo Héctor Zambrano González, respecto de Slim Lafertte González, impugnado por falta de autenticidad, por cuanto se trata de un instrumento privado emanado de un tercero, donde no consta que la rúbrica puesta en el documento corresponda a quien dice extenderlo, como tampoco que quien lo hace tenga las competencias y títulos especializados para emitir afirmaciones contenidas y que realmente haya sido otorgado en la fecha y por quien se supone lo suscribe.
- viii) Ficha clínica emitida con fecha 05 de marzo de 2013, por la especialista del Centro Médico Español, la facultativo María Esther Meroni, impugnada por falta de autenticidad, por tratarse de un instrumento privado emanado de un tercero, que individualiza con enmendadura evidente el nombre del paciente como Slim Lasertte González, sin constar que la firma del documento corresponda a quien dice extenderlo, que quien lo extiende tengas las competencias y títulos especializados para emitir las afirmaciones contenidas en el, y que realmente haya sido otorgado en la fecha y por quien se supone suscribe.
- ix) Impresión de consulta en página web vademécum.es respecto del medicamento "Mimetix", impugnado por falta de autenticidad y por falta de integridad, toda vez que se trata de un documento electrónico privado que debió ser acompañado bajo el apercibimiento indicado en el artículo 346 N° 3 del Código de



Procedimiento Civil, por lo que su omisión le hace carecer de toda valoración en juicio, a lo que adiciona el recurrente que no consta la autenticidad del documento por cuanto no se acredita que haya sido otorgado en la forma y por quienes aparecen y por no ser íntegros y completos, ya que no existe ninguna identificación mediante cédula de identidad de los involucrados.

- x) Descripción del clorhidrato de memantina, en la página web del Instituto de Salud Pública, objetado por falta de autenticidad y de integridad, por cuanto se trata de un documento electrónico privado y debe ser acompañado conforme los apercibimientos del artículo 436 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no puede ser valorado en juicio.

SEGUNDO: Que evacuando el traslado conferido, el apoderado de la demandante solicita el rechazo total y absoluto de las objeciones promovidas por la demandada, con costas, y asevera respecto de los documentos signados con los número i) y ii) que se trata de documentos emitidos por dos connotados especialistas de la profesión médica, el primero titulado por la Universidad de Chile y la segunda por la Universidad de la República del Uruguay, con la especialidad de geriatría, el primero además constaría en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, el que tiene un carácter público. Respecto de los documentos signados con los números iii) y iv) señala respectivamente que la falta de autenticidad e integridad del set de correos electrónicos son una mera declaración de la demandada, cuyo valor probatorio sería determinado por el sentenciador respecto de los puntos de prueba fijados, agregando que la falta de integridad de los mismos no fue desarrollada en orden a determinar cómo se compondría tal falta de integridad. En el caso de la impresión de farmacias Cruz



Verde, controvierte la actora que se trate de un documento electrónico privado, por cuanto fue obtenido de forma pública a través del sitio web del proveedor o intermediario Cruz Verde, argumentos que hace extensivos a la impresión de consulta de la página web vademecum.es, signada con el número v).

Respecto del documento signado con el número vi) y que corresponde a la ficha clínica emitida por el Cesfam de Doñihue, plantea que se trata de un documento emitido por una institución dependiente del Servicio de Salud de O'Higgins, que a su vez depende del Ministerio de Salud, recordando que la Ley de Bases de la Administración del Estado, señala expresamente que son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, así como los fundamentos y documentos en que estos se contengan, y los procedimientos en su elaboración y dictación, de consiguiente la objeción no encuentra fundamento normativo, toda vez que se trata de un documento auténtico, emitido por un órgano descentralizado y con personalidad jurídica perteneciente a la administración pública.

Reitera luego en lo tocante al documento signado con el número vii) los argumentos expresados para la documental signada con el número i) los que damos por reproducidos, y para los documentos signados con los numerales viii), ix) y x) respectivamente, primero que la ficha clínica emitida con fecha 5 de marzo de 2013, fue emitida por quien fuera pieza fundamental del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad que padecía Slim Herbert Lafertte González, ficha clínica además que es avalada por el centro médico español, institución que goza de relevante prestigio debido a la calidad de sus especialistas y su atención personalizada en todas las áreas de la medicina; por último, en el caso de los documentos ix) y x), corresponden a páginas web de carácter



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TSWBXHQZGMB

público, al alcance de quien quiera verla y cuyo valor probatorio deberá ser determinado por el sentenciador.

TERCERO: Que respecto de los documentos individualizados con los números i), ii), vi), vii) y viii), se ha objetado su falta de autenticidad o falsedad, cuestionándose que los mismos hayan sido realmente otorgados o autorizados por las personas y de la manera en que en ellos se expresa, sin embargo, cabe tener presente que se trata de certificados médicos (en el caso de i), ii) y vi), y de fichas clínicas (en el caso de vii y viii), es decir, instrumentos privados emanados de un tercero ajeno al juicio, razón por la cual debe descartarse desde ya la causal de impugnación de falta de autenticidad que se encuentra consagrada por nuestro legislador para atacar la valoración de los documentos públicos, por lo que su objeción habrá de ser rechazada. En este punto y sólo respecto del documento ii), en que se individualiza a Slim Lasertte, debiendo decir Slim Lafertte, resulta evidente que se trata simplemente de un error de transcripción, por lo que no resulta dudoso la persona de quien hace referencia.

En lo relativo a la ausencia de valor probatorio de tales documentos atendida la forma en que fueron acompañados, según se expuso en el párrafo precedente, se trata de un instrumentos emanados de un tercero ajeno al juicio, pero el valor probatorio que se le asigne a los mismos es propio de las facultades privativas del Tribunal, por lo que la alegación será desestimada igualmente.

CUARTO: Que respecto de los documentos signados como iv), v), ix) y x) que corresponden a consultas en sitios web, se les impugna por falta de autenticidad y de integridad, indicando que se trata de documentos privados electrónicos que debieron ser acompañados con conocimiento y bajo el apercibimiento establecido en el artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, por lo que al ser mal aparejados al proceso, carecerían de todo valor probatorio.



QUINTO: Que idéntica alegación fue planteada por el recurrente ante el tribunal de la instancia, el que no dio lugar al recurso interpuesto por haber sido acompañados con citación y bajo el apercibimiento legal que correspondía, por lo que los motivos de la objeción, no atañen a causales legales de impugnación.

A mayor abundamiento, no puede olvidarse que la forma en que se acompañan los documentos en el marco del término probatorio, determina la forma y plazo en que aquellos pueden ser objetados, erigiéndose como una garantía procesal de bilateralidad en un proceso reglado, lo que desde ya permite despojar de validez la alegación planteada en dicho sentido por la parte demandada.

De consiguiente, la objeción en el caso de estos tres documentos no pretendía más que atacar el valor probatorio de los mismos, tarea privativa del sentenciador, por lo que la objeción planteada será rechazada igualmente.

SEXTO: Que por último, respecto de la documental signada como iii) y que corresponde a un set de correos electrónicos entre Marta Farías Allende y Elizabeth G., se trata de instrumentos privados que emanan de las partes, cuyo fundamento es la forma en que fueron acompañados, sin embargo, de lo expuesto aparece que lo que se objeta verdaderamente es su valor probatorio, el que como ya se dijera corresponde al sentenciador realizar, desestimándose esta alegación igualmente.

Sin perjuicio de la conclusión referida precedentemente, se advierte como se suele confundir por los litigantes el valor probatorio de los instrumentos privados que emana de terceros, empleados en un juicio para acreditar la existencia de una obligación adquirida por la contraparte, con aquel valor que debe asignársele a aquellos que son presentados con un objeto diverso, pues en esta última situación, la aplicación de las normas relativas al valor probatorio de los instrumentos no debiera resultar tan rígido como se ha



pretendido, pues a su respecto, las normas del artículo 1698 y siguientes del Código Civil, y aquellas contenidas en el artículo 346 del precitado Código de Procedimiento Civil, sólo resultan aplicables en la medida que se busque acreditar en juicios obligaciones contraídas por la contraparte, pero no así otras circunstancias de hecho discutidas en el proceso.

II.-EN CUANTO AL FONDO:

SEPTIMO: Que como ya se ha indicado, la demanda en autos corresponde a un juicio ordinario de nulidad de contrato de compraventa de la nuda propiedad y usufructo otorgada por escritura pública, repertorio 2000-2013, suscrita ante notario Eduardo De Rodt Espinosa, atendida la ausencia de voluntad de Slim Herbert Lafertte González, disponiendo la cancelación de las inscripciones correspondientes; en subsidio de la acción principal, y para el evento de considerarse capaz al padre y abuelo de los actores, demandan en juicio ordinario de nulidad por simulación, al no haberse pagado nunca el valor de venta, constituyendo en definitiva, una donación encubierta, carente de los requisitos legales que la hacen procedente.

OCTAVO: Los actores fundan su pretensión en que a la fecha de celebración del respectivo contrato con la demandada, el 22 de mayo de 2013, el vendedor, Slim Herbert Lafertte González, tenía 79 años y padecía demencia crónica por Alzheimer, de larga data, debiendo estar al cuidado de terceros, por lo que no pudo haber dado un consentimiento válido en favor de la demandada, ignorando incluso que el precio de venta, nunca le fue enterado por la parte compradora.

NOVENO: Que, en opinión de esta Corte, los documentos agregados al proceso por la demandante dan cuenta que el vendedor, a la época de celebración del contrato de autos padecía demencia y Alzheimer, afección neurológica que merma la capacidad de quien las padece para obligarse y consentir libremente en un acto o contrato, por lo que



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TSWBXHQZGMB

habiendo resultado fracturada la presunción de validez de los actos jurídicos celebrados por la persona demente previos al decreto de interdicción, contenida en el inciso 2° del artículo 456 del Código Civil, la demanda intentada ha de ser acogida.

Por estas consideraciones y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 1.437, 1.439, 1.440, 1.441, 1.443, 1.444, 1.445, 1.460, 1.467, 1.681, 1.682, 1.683, 1.698, 1.701, 1.708, 1.709, 1.712 y demás pertinentes del Código Civil; 144, 174, 253 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se resuelve:

I.- Que se **RECHAZAN** las objeciones documentales deducidas por el apoderado de la demandada a folio 62.





II.- Que se mantienen los resolutivos I, II y III, de la sentencia que se substituye.

Redacción de la Ministro Sra. Quintana Letelier

Rol Corte 1559-2022.

“Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema”.

Se deja constancia además que no firma la Ministra Suplente señora Visnia Madmoud Auad por haber cesado sus funciones en esta Corte, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo del mismo.

<div></div> <div>Bárbara Verónica Quintana Letelier Ministro(P) Corte de Apelaciones Catorce de agosto de dos mil veintitrés 19:14 UTC-4</div> <div></div>	<div></div> <div>Alberto Salvador Veloso Abril Abogado Corte de Apelaciones Catorce de agosto de dos mil veintitrés 18:25 UTC-4</div> <div></div>
---	--



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TSWBXHQZGMB

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministra Presidente Barbara Quintana L. y Abogado Integrante Alberto Salvador Veloso A. Rancagua, catorce de agosto de dos mil veintitres.

En Rancagua, a catorce de agosto de dos mil veintitres, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TSWBXHQZGMB